

Ve en [www.izquierdanacional.org](http://www.izquierdanacional.org): Bases económicas de la política burguesa argentina (septiembre, 1945), por Aurelio Narvaja ★ La cuestión nacional y los orígenes de la izquierda nacional (julio, 2003), por Honorio Alberto Díaz ★ El pensamiento socialista ante el derrumbe del stalinismo y las rivalidades interimperialistas (julio, 1991), por Ernesto Ceballos ★ Por qué cayó el gobierno peronista (julio, 1976), por Jorge Abelardo Ramos ★ Tosco: homenaje a un luchador (noviembre, 1975), FIP Córdoba ★ Oligarquía, renta diferencial y socialismo en Argentina (octubre, 1973), por Héctor Alonso ★ Asesinato de Rucci: provocación imperialista (octubre, 1973), Izquierda Popular ★ Reportaje al compañero Blas Alberti en Canal 7 (junio, 1971)

# SL SOCIALISMO LATINOAMERICANO

núm. 15 - año 2 - octubre de 2010 - segunda época - \$1,00

IZQUIERDA NACIONAL ~ ARGENTINA

# PONER FIN AL FRAUDE Y AL SECRETO EMPRESARIO

Las grandes cámaras empresarias han rearmado su bloque patronal, fracturado desde 2008 por las diferencias entre terratenientes e industriales durante el enfrentamiento en torno a las retenciones, y se aprestan a dar batalla en defensa de sus derechos de propiedad y en contra de la interferencia sindical en asuntos de su "exclusiva competencia". La previsible reacción de los altos círculos de negocios es motivada por el proyecto del diputado Héctor Recalde, destinado a poner en práctica lo que la Constitución establece desde hace cinco décadas: la participación de los trabajadores en la distribución de las ganancias. Ese distinguido círculo, integrado por la industria, el gran comercio, la construcción, la propiedad terrateniente, la banca y la bolsa, declaró días atrás su rechazo categórico a "los proyectos en cuestión, máxime cuando se comprueba que avanzan hacia un poder de interferencia sindical que choca contra los principios constitucionales de derecho de propiedad y de ejercicio de toda industria lícita, al otorgar a los sindicatos facultades de fiscalización y de información ajenas a su cometido, muy superiores a la de los propios accionistas".

La indignación de estos "honorables" burgueses es comprensible. Durante más de dos siglos el capitalismo ha impuesto entre sus portadores la creencia de que la fuerza de trabajo es una mercancía más y que, en consecuencia, una vez pagado su precio, lo que sobreviene es el sagrado derecho a disponer sin limitación alguna de los resultados de su explotación. Esta creencia, que para cualquier empresario es una verdad de sentido común, no admite -según ellos- discusión alguna, así como tampoco la admite el supuesto derecho a mantener frente a sus trabajadores en el más estricto secreto las cuentas de sus empresas. La nota con la que *La Nación* dio cuenta del comunicado del Grupo de los Seis es ilustrativa al respecto. Según el cronista, uno de los participantes del encuentro emitió *off the record* esta sabia reflexión: "Esto es una locura. Los gremios van a tener una herramienta para jorobar desde adentro revolviendo papeles".

No es para menos. El artículo 18 del proyecto en cuestión establece que "la asociación sindical podrá fiscalizar la información proporcionada por la empresa y requerir la totalidad de la información complementaria y documentación respaldatoria que considere necesaria para cumplir con su cometido".



Esta exigencia es de cumplimiento obligatorio "no pudiendo (la empresa) negarse a su entrega ni obstaculizar el ejercicio de las facultades de control. En caso contrario será considerada práctica desleal", y los trabajadores podrán hacer valer su derecho a través de la justicia, al margen de las multas o sanciones que correspondan.

Este artículo es la llave maestra del proyecto. Las grandes corporaciones, por ejemplo en ramas como la automotriz y la alimentación, denunciadas por la AFIP, se valen de distintos artilugios para disimular ganancias y evadir impuestos. Que los empresarios estén obligados a abrir sus libros a los representantes sindicales, a pesar de la corrupción de la burocracia (hay sindicatos que cobran a las empresas una tasa por cada trabajador en negro, a cambio de no presentar la denuncia correspondiente), constituye un peligro cierto y un precedente que no puede dejar de alarmar a los sufridos hombres de negocios.

Así las cosas, los trabajadores están convocados a una doble batalla: primero para vencer las resistencias que se han desatado en las filas patronales, entre los partidos de la derecha y aun en sectores del oficialismo; y luego, para imponer la democratización y una política independiente en los sindicatos.

*Hace tiempo que los trabajadores han tomado buena cuenta del carácter antiobrero y antinacional de estas patronales, y han sacado conclusiones sobre lo que cabe esperar al respecto. Si "la humanización del capital" y la conciliación de clases con que el peronismo pretendió cimentar el frente de clases en los cuarenta y los cincuenta encerraba una imposibilidad cierta que antes o después habría de manifestarse, como quedó en evidencia en septiembre de 1955 y en marzo de 1976, en el presente lo que está a la vista es un antagonismo irreductible.*



#### Como en Cuba

Cuando se enteró de la iniciativa del diputado Recalde, el titular de la Unión Industrial, Héctor Méndez, declaró muy suelto de cuerpo que "Argentina se parece a Cuba". Inmediatamente sobrevinieron las advertencias patronales sobre sus consecuencias: pérdida

de competitividad empresarial, caída de las inversiones y vulneración de la seguridad jurídica, entre otras calamidades. Méndez fue presidente de la central industrial en los noventa, cuando la gran burguesía fabril era oficialista con Menem. No es un directivo con peso propio, más bien un fantoche colocado por el ala neoliberal, especialmente las corporaciones agroalimentarias agrupadas en Copal, pero en esa opinión (que se cuidó muy bien en repetir), está expresado el pensamiento que la mayoría de sus pares no se atreven a formular públicamente. Se trata de una burguesía reaccionaria, asociada al capital extranjero, responsable de la colosal fuga de capitales que bloquea los resortes internos de una acumulación autocentrada; una burguesía enriquecida en los circuitos de la especulación financiera de la década pasada, mientras el "uno a uno" y la apertura comercial destruían segmentos fabriles enteros; una clase miserable que añora los años de la flexibilización laboral de Menem y De la Rúa, "los contratos basura", los despidos baratos y la norma que permitía pagar con monedas los accidentes laborales. Sus dirigentes son dignos descendientes de aquellos patrones que a fines de 1945 organizaron un fallido *lock out* para tratar de impedir la puesta en práctica del aguinaldo.

Hace tiempo que los trabajadores han tomado buena cuenta del carácter antiobrero y antinacional de estas patronales, y han sacado conclusiones sobre lo que cabe esperar al respecto. Si "la humanización del capital" y la conciliación de clases con que el peronismo pretendió cimentar el frente de clases en los cuarenta y los cincuenta encerraba una imposibilidad cierta, que antes o después habría de manifestarse, como quedó en evidencia en septiembre de 1955 y en marzo de 1976, en el presente lo que está a la vista es un antagonismo irreductible.

Es de suma importancia tener esto en cuenta. El nuevo Frente Nacional que aglutinará a las grandes mayorías en las próximas batallas políticas habrá de construirse sobre una especial tensión de clase. Entrelazadas con las reivindicaciones nacionales, democráticas, populares y antiimperialistas, estarán presentes las interpelaciones de clase, que darán significación a la presencia de los trabajadores y el conjunto de las masas explotadas. La lucha por la emancipación nacional plena es la lucha por el socialismo; uno y otro objetivo están firmemente unidos sobre la base de una acumulación de contradicciones que divide a la sociedad argentina en dos campos definitivamente antagonicos. ■

Si considerás que las estructuras político-económicas instauradas por el proceso cívico-militar iniciado en 1976 siguen vigentes gracias a la partidocracia; que es necesario construir un nuevo Frente Nacional Revolucionario, con base en la clase trabajadora y los sectores patrióticos; si rechazás los socialismos importados y creés que cada país construye su propio camino hacia la liberación, sobre la base de sus propias tradiciones históricas,

sumate a SOCIALISMO LATINOAMERICANO  
[www.izquierdanacional.org](http://www.izquierdanacional.org)  
[contacto@izquierdanacional.org](mailto:contacto@izquierdanacional.org)

# TRAS LOS RESULTADOS ELECTORALES DEL 26 DE SEPTIEMBRE

# La revolución bolivariana entra en una fase decisiva

*No hay duda de que un régimen como el de Chávez ha de despertar la mayor de las resistencias de parte de las fuerzas tradicionales del establishment semicolonial, del capital extranjero y de sus gobiernos. Sin embargo, el núcleo del problema no está en los votos que ganó la oposición, sino en los que perdió el oficialismo.*

El gobierno bolivariano derrotó a la derecha opositora en las elecciones del pasado 26 de septiembre en Venezuela. Esto era lo previsible; sin embargo, no alcanzó el objetivo de garantizar el control de dos tercios de la Asamblea Nacional. El resultado de la elección no fue una “victoria contundente”, como afirmaron varias voces del oficialismo. El Partido Socialista Unido de Venezuela logró una representación de 98 diputados y la oposición sumó 65; pero contados los votos, 5,4 millones (46% sobre el total) fueron a favor del régimen chavista y 5,3 millones para los enemigos de la revolución. El gobierno ganó en 17 estados de los 24, pero perdió comicios claves en Tachira, Zulia, Anzoátegui y Sucre. Sin embargo, hay otro dato significativo que vale la pena tener en cuenta: en números redondos, respecto a las elecciones presidenciales de 2006, el PSUV perdió 1,9 millones de votos y los opositores ganaron un millón; en comparación con las elecciones regionales de 2009, la pérdida de votos del chavismo fue de 900.000.

El gobierno debió afrontar varios problemas durante 2010, cuyo impacto tuvo incidencia sobre el resultado electoral, entre ellos la crisis energética y la caída del precio del petróleo, y otros que amenazan tornarse endémicos, como la alta inflación, el desabastecimiento y la inseguridad. También es cierto que no sólo tuvo que enfrentar a los partidos de la oposición, sino a los oligopolios mediáticos nativos y extranjeros que armaron una feroz campaña con base en mentiras e intimidación hacia la clase media, a lo que se sumó la injerencia ideológica y financiera de los organismos tradicionales que utiliza Washington en estos casos: USAID, NED, ONG dependientes de los partidos Demócrata y Republicano.

Por OSVALDO CALELLO



No hay duda de que un régimen como el de Chávez ha de despertar la mayor de las resistencias de parte de las fuerzas tradicionales del *establishment* semicolonial, del capital extranjero y de sus gobiernos. Sin embargo, el núcleo del problema no está en los votos que ganó la oposición, sino en los que perdió el oficialismo. ¿Qué ocurrió para que las cosas se presentaran de este modo? Marea Socialista, corriente interna del PSUV, realizó la siguiente reflexión crítica sobre los resultados del 26 de septiembre: “Repitieron el viejo esquema clientelar, sin incentivar el debate y la discusión, bajando líneas decididas entre cuatro paredes, desorganizando y combatiendo a los militantes más críticos y creativos de nuestro pueblo, la dirección del partido y de la campaña, despreció las alertas que el pueblo bolivariano viene haciéndoles. Nunca fueron capaces de entender que los logros de la revolución son asociados a la lucha popular, a la disposición de cambio de nuestro pueblo y al gobierno personificado fundamentalmente y sólo en el comandante Chávez. Y haciendo abuso de sus privilegios, ponen en riesgo hasta la credibilidad del propio presidente”.

La nota señaló el deterioro sufrido por las grandes conquistas de la revolución en materia de salud y de derechos sociales, y

acusó a la burocracia de haber llevado al país al borde del caos energético por tratar de impedir que los trabajadores de la rama de generación eléctrica intervinieran en la resolución del problema. Las imputaciones contra la burocracia son varias: boicot a las experiencias de control obrero, oposición al proyecto de nueva Ley Orgánica del Trabajo, bloqueo del contrato colectivo de los empleados públicos. Su especialidad parece residir en la organización de conspiraciones palaciegas para hacerse del control de puestos claves en el gobierno, aunque también se distingue por su pasividad, que raya en complicidad, ante el asesinato sistemático de centenares de militantes sociales, campesinos y obreros.

## Los peligros del bonapartismo

Desde hace tiempo, las críticas que parten de las filas militantes del chavismo coinciden en un punto: el papel decisivo que desempeña la jefatura de Chávez en los avances que registra el programa de gobierno y, por el contrario, el carácter conservador y retardatario de la mayor parte de las líneas dirigenciales y burocráticas del Estado y, en muchos casos, del partido.

La centralidad de la figura de Chávez en el proceso de transformaciones y reformas en curso es indudable. En Venezuela, el Estado lleva adelante tareas nacionales y democráticas que la burguesía nativa ha dejado de lado, y su jefe es la síntesis de un gran frente nacional antiimperialista integrado por los trabajadores, el campesinado, las masas semiproletarias, las capas bajas de la pequeña burguesía y del empresariado y la oficialidad y suboficialidad nacionalista de las Fuerzas Armadas. Semejante sistema de fuerzas le ha dado a Chávez un grado considerable de autonomía política y una fuerte concentración de poder.

Al mismo tiempo, este tipo de estructura bonapartista desarrolla y consolida burocracia en los distintos niveles del aparato estatal y tiende a establecer mecanismos de control sobre las organizaciones de masas: sindicatos, cooperativas, etc. Ese cuerpo intermedio de funcionarios, instalado entre las esferas ejecutivas del Estado y las masas, ha desarrollado sus propios intereses, aborrece el conflicto y resiste todo cambio que implique el riesgo de perder las posiciones conquistadas.

La contrapartida de la alta concentración del poder gubernamental y partidario de la construcción chavista y, en gran medida, su consecuencia, es la ausencia de una dirección colectiva y el débil desarrollo de un



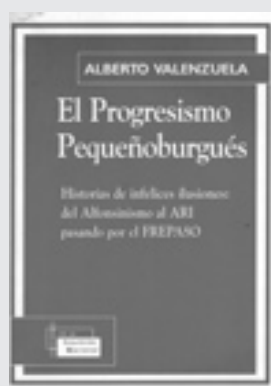
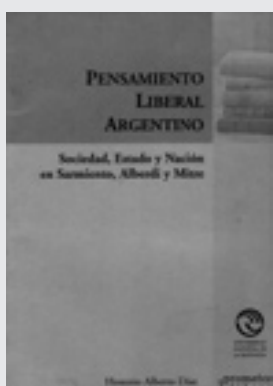
sistema orgánico de cuadros que opere como herramienta de articulación de la militancia. Este es el punto vulnerable de la revolución bolivariana, y el que abre los mayores interrogantes de cara a un futuro próximo de batallas decisivas.

Chávez ha proclamado que el objetivo es el socialismo. Sin embargo, luego de diez años de gobierno en los que se han registrado avances importantes en la situación material de las masas, y la política de nacionalizaciones ha afirmado la presencia estatal en áreas importantes para la soberanía nacional, la resolución de problemas de gravitación estratégica siguen pendientes: la reforma agraria ha avanzado lentamente; resortes claves en el proceso de acumulación de capital, como la banca y el comercio exterior, se mantienen bajo el control de la burguesía; mientras tanto, la importancia del capital privado en la economía, lejos de disminuir, ha crecido.

Los partidos de la derecha han proclamado una victoria que no han obtenido. Pero su posición se ha fortalecido y, a partir de ahora, atrincherados en estamentos institucionales, se preparan para lanzar una feroz ofensiva con vistas a bloquear al gobierno y crear las condiciones para la derrota de Chávez en las elecciones presidenciales de 2012. De forma tal, la revolución bolivariana ha entrado en una fase crítica: o avanza profundizando las tareas pendientes o la contrarrevolución se hará cada vez más fuerte y desafiante. Sin embargo, hay que tener bien presente que la radicalización del proceso chavista no depende sólo de las medidas que el gobierno adopte: significa, antes que nada, la intervención creciente de los trabajadores y las masas populares en la resolución de los problemas fundamentales del país, en la gestión de la política, la economía y los asuntos públicos en general; y significa, en un sentido más amplio, la consolidación de un bloque nacional-popular, de una voluntad colectiva y de una hegemonía de contenido democrático y socialista. ■

## NUESTROS LIBROS

Para mayor información, escribinos a: [contacto@izquierdanacional.org](mailto:contacto@izquierdanacional.org) o visitá nuestra web: [www.izquierdanacional.org](http://www.izquierdanacional.org)



# Ejercicios militares británicos en Malvinas Oportunistas y sinvergüenzas “forever”



Responder hechos con palabras es la opción escogida por Cristina Fernández para enfrentar al colonialismo británico encarnado en las islas Malvinas desde hace 177 años. Inglaterra ha utilizado esos 177 años para consolidar en los hechos su presencia colonial en nuestro archipiélago y, de hecho—como afirmara recientemente Mario Cafiero—, “casi el 50% de nuestro territorio está usurpado o es pretendido por el Reino Unido, que haciendo base en Malvinas y las Islas del Atlántico Sur, ha extendido su ocupación de hecho a los enormes espacios marítimos circundantes y pretende extenderse a lo que ellos llaman la Antártida británica (superposición de los reclamos argentinos y chilenos)”.

¿Qué han hecho los gobiernos argentinos en esos mismos 177 años? Con la excepción del último de la dictadura cívico-militar del Proceso, que recuperó las islas Malvinas durante unos meses en 1982, y que a pesar de las motivaciones originales resultó una gesta heroica que el imperialismo y sus idiotas útiles se empeñan en difamar y ocultar—, los gobiernos argentinos se han dedicado a los discursos verborrágicos e insustanciales y, peor aún, a las más vergonzosas contradicciones, como reclamar la legítima soberanía de las islas al tiempo que se permite el control de millo-

nes de hectáreas en el territorio continental por parte de ciudadanos británicos y de otras naciones, y la explotación de los recursos naturales argentinos por parte de empresas extranjeras. Y ahora, durante la actual gestión de la pareja Kirchner-Fernández, la negociación de la ilegítima, ilegal y fraudulenta deuda externa argentina se puso en manos del banco británico que financia la exploración petrolera pirata en aguas argentinas.

El último capítulo de esta telenovela lo constituyen las frívolas, oportunistas y descaradas declaraciones de Cristina Fernández, que en un tono de “sorpresa” denuncia maniobras militares de Inglaterra en Malvinas, que se realizan regularmente cada seis meses desde hace ¡28 años!, según declaraciones de los británicos, que el gobierno argentino no desmintió.

La oposición es aún peor. Ni siquiera hace mención de Malvinas, seguramente consideran a la soberanía como un asunto secundario, cuando lo consideran. Su prioridad es disputarle el poder formal al matrimonio presidencial, en el toma y daca que alimentan los poseedores del poder real, el cual no ha cambiado de manos desde 1976.

Nunca estará de más hacer declaraciones contra el colonialismo y en defensa de la soberanía nacional, pero los



discursos son actos oportunistas e hipócritas cuando al mismo tiempo no se ejercen acciones concretas para solventar las palabras con los hechos. Fiel a su estilo, la actual gestión Kirchner-Fernández se llena la boca de palabras “patrióticas” y los bolsillos de dinero, pero no actúa, en el caso de Malvinas, haciendo uso de todos los recursos legítimos y legales que permitirían hacer muy costosa la presencia de Inglaterra y presionarla por todos los medios a abandonar nuestras islas. ■

## Ecuador, una llamada de atención

Por FACUNDO ARRIETA

Comencemos por dejar clara la necesidad de repudiar sin medias tintas cualquier intento por derrocar a un gobierno legal y legítimo que puso en marcha un proceso de cambios destinados a reconstruir la soberanía nacional y popular en Ecuador.

A medida que pasan los días después de la insubordinación policial y las acciones colaterales, el panorama en Ecuador se vuelve más complejo. Desde quienes—como el presidente Correa—denuncian un intento golpista, hasta aquellos que acusan la manipulación de los hechos por parte del gobierno, existe un abanico amplio de opiniones divergentes.

¿Qué hubiese ocurrido si el presidente Correa no se presentaba frente a los insubordinados, poniendo en riesgo su integridad física y el máximo cargo que ostenta? Muy probablemente la dimensión del suceso hubiese sido otra y la repercusiones mucho menores en todos los ámbitos y niveles. La escalada de los acontecimientos mucho tuvo que ver también con el hecho de que los insubordinados secuestraron al Presidente de la República sin saber qué hacer con él.

Mucho se especula sobre quiénes fueron los “cerebros” de la asonada y si los sectores oligárquicos vieron en ella la oportunidad de tomar el poder, lo cierto es que las aguas volvieron a su nivel pero siguen agitadas.

### Ni con los golpistas ni con el gobierno

Curiosamente, diversas organizaciones indígenas, campesinas y políticas de izquierda tuvieron una primera reacción equívoca frente al suceso, solidarizándose con los reclamos de los policías insubordinados y criticando al gobierno al tiempo que reprobaban cualquier intento golpista.

Una vez controlada la situación, las principales organizaciones indígenas y campesinas (Conaie, Ecuarunari, Confeniae y Conaice) emitieron una declaración conjunta cuyos párrafos sustanciales reproducimos por considerar importante la opinión de quienes poseen comprobada representatividad popular y han sido artífices en gran medida de la derrota de los últimos gobiernos neoliberales:

“Nosotros no tenemos duda que esta crisis política sea una reacción de la derecha contra la Constitución del 2008, aprobada

*La asonada de un sector de la policía presenta una oportunidad para tomar conciencia de la urgente necesidad de los sectores patriotas de reorganizarse y sumar fuerzas para radicalizar el proceso de cambio antes de que sea tarde.*

*por el voto favorable del 64% de los ecuatorianos y ecuatorianas”.*

Pero inmediatamente se diferencia del gobierno y la oposición al manifestar su “rechazo a la política económica y social del gobierno, y con la misma energía rechaza también las acciones de la derecha que, encubierta, forma parte de un intento de golpe de Estado”.

Para estas organizaciones, la insubordinación de la Policía, más allá de sus demandas inmediatas, desnuda:

“1. Mientras el gobierno se ha dedicado exclusivamente a atacar y deslegitimar a los

*sectores organizados, como el movimiento indígena, los sindicatos de trabajadores, etc., no ha debilitado en lo más mínimo las estructuras de poder de la derecha, ni siquiera dentro de los aparatos del Estado.*

“2. La crisis social desatada hoy día también es provocada por el carácter autoritario y la no apertura al diálogo en la elaboración de las leyes.

“3. Frente a la crítica y movilización de las comunidades en contra de las transnacionales mineras, petroleras y agro-comerciales, el gobierno, en lugar de propiciar el diálogo responde con violenta represión.

“4. Este escenario alimenta a los sectores conservadores.”

Señalan su rechazo “a la política económica y social del gobierno, y con la misma energía rechazamos también las acciones de la derecha que, encubierta, forma parte de un intento de golpe de Estado”.

Demandan del gobierno nacional “deponer toda actitud de concesiones a la derecha. Exigimos que abandone su actitud autoritaria contra los sectores populares, a no criminalizar la protesta social y la persecución a los dirigentes; ese tipo de políticas lo único que provoca es abrir espacios a la derecha y crea escenarios de desestabilización.”

Finalmente señalan que “la mejor forma de defender la democracia es impulsar una verdadera revolución que resuelva las cuestiones más urgentes y estructurales en beneficio de las mayorías.”

### La versión de Correa

Una vez liberado, el presidente Correa se ocupó de aclarar que los insubordinados eran una pequeña minoría entre los 42,000 policías, lo cual, lejos de tranquilizar, preocupa al comprobar que tan pocos provocaron tanto escándalo. Denunció los serios problemas de inteligencia que padece su gobierno. Se defendió de las críticas a su gestión señalando que los gobiernos progresistas como el suyo padecen la obstrucción permanente de los reaccionarios, por la derecha, y de los radicalizados, por la izquierda. Garantizó que no habrá perdón para los responsables de la asonada y que se investigará hasta las últimas consecuencias para castigar con todo el rigor de la ley a quien corresponda.

### Conclusión elemental

Siendo diferentes las condiciones específicas del proceso ecuatoriano y del venezolano, la salida de la coyuntura actual es la misma para ambos gobiernos: profundizar el proceso de cambios anunciados al inicio.

En el caso de Ecuador, dos datos relevantes parecen surgir de los acontecimientos comentados: la dificultad para desmontar las estructuras de poder formal y real heredadas del sistema que se pretende reemplazar, y la distancia entre el gobierno de Correa y las organizaciones populares que dieron sustento a su triunfo electoral y a la promulgación de la nueva constitución.

Lejos de pretender comparar a Rafael Correa con Lucio Gutiérrez, el primero no debería perder de vista que las organizaciones populares que lo llevaron al poder fueron las mismas que derrocaron a Gutiérrez.

Sin duda, el distanciamiento entre el gobierno y las más representativas organizaciones populares es responsabilidad de ambas partes. Resulta imprescindible que se encuentren los caminos para consolidar un frente único que consolide un proceso revolucionario, reorientando y corrigiendo lo que haya que corregir en el rumbo actual. Los sectores reaccionarios permanecen agazapados esperando la oportunidad para recuperar el poder que les fue legítimamente arrebatado. ¿Fue la asonada de un sector de la policía una de estas oportunidades? Tal vez. Ciertamente es que lo fue para tomar conciencia de la urgente necesidad de las patrióticas de reorganizarse y sumar fuerzas para radicalizar el proceso de cambio antes de que sea tarde. ■



# El veto de la vergüenza

A penas concluida la votación en el Senado que dio aprobación a la ley que establece el 82% móvil para las jubilaciones mínimas, el bufón de palacio que ocupa la jefatura de gabinete anticipó por *twitter* el veto presidencial. Horas más tarde, la presidenta Cristina Fernández cali-

ficó la norma aprobada como “una ley estafa y de quiebra del Estado”. De esta forma, el gobierno kirchnerista expresó una vez más cuál es su orden de prioridades: seguirá pagando puntualmente la ilegítima y fraudulenta deuda externa, y para tal fin se seguirá financiando con los fondos del

ANSES. Casi dos tercios del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, constituido con el superávit del organismo, se destina a financiar pagos de la deuda y otros gastos estatales. El kirchnerismo rechazó cualquier posibilidad de reestablecer el pago pleno de los aportes patronales, reducidos a la mitad

por el dúo Menem-Cavallo en los noventa, e igual decisión tomó respecto de gravar la renta financiera. En consecuencia, el 70% de los jubilados continuará cobrando el haber mínimo de 1.046 pesos, y el gobierno continuará respetando los intereses del parasitismo financiero y de la gran patronal

## El oro de la Barrick no alcanzó para congelar la ley de los glaciares

Por GUILLERMO HAMLIN

Por dos votos de diferencia, el Senado aprobó la Ley de Protección de Glaciares originada en la Cámara de Diputados. Esto significó una derrota de los gobernadores de las provincias mineras subordinados a los intereses de las corporaciones extranjeras dedicadas a esa actividad en gran escala. De nada valieron las presiones e intimidaciones del senador Nicolás Fernández, incondicional de la pareja presidencial, para alinear al bloque oficialista con los deseos de la Casa Rosada y la Barrick Gold.

Atrás de la discusión que llevó a la aprobación de la denominada “Ley de Protección de Glaciares” hay importantes aspectos que se han mantenido ocultos a la mayoría de la población; los responsables de estas maniobras de ocultamiento son los integrantes del triángulo del saqueo, conformado por los funcionarios gubernamentales –tanto nacionales como provinciales y municipales–, las empresas mineras y las internacionales ecologistas, con la complicidad de los medios de difusión, que responden a los intereses generales del imperialismo.

Las condiciones para que las empresas mineras transnacionales –la mayoría de ellas, canadienses– pudieran efectuar el saqueo de nuestros minerales de manera “legal” y “sustentable” fueron establecidas mediante decisiones de los gobiernos que se sucedieron desde el golpe cívico-militar de 1976. En efecto, la legislación financiera de 1977 y la de inversiones extranjeras de 1980, establecidas en la gestión de Martínez de Hoz-Videla, facilitaron el movimiento internacional de capitales y el endeudamiento externo, lo que explica la extranjerización de la banca, la industria, los servicios y las tierras, y la reubicación de la economía argentina en la división internacional del trabajo, que se reduce a un perfil de economía primarizada. Ambas leyes siguen hoy vigentes y mantienen la “seguridad jurídica” para beneplácito de las corporaciones transnacionales, no sólo las mineras.

A principios de los noventa comenzó a instaurarse una nueva política minera, que introdujo cambios sustanciales en la legislación, como la reforma constitucional realizada por la partidocracia en 1994, cuyo contenido permite la transferencia de la propiedad de los recursos del subsuelo a los estados provinciales. El Banco Mundial otorgó a la Argentina créditos por 86 millones de dólares para el financiamiento del Programa de Asistencia al Plan Minero, cuyo objetivo era alcanzar reformas políticas e institucionales favorables a la actividad. Como parte del programa, se desmanteló Yacimientos Carboníferos Fiscales, HIPASAM y Fabricaciones Militares; se paralizó la producción de uranio por parte de la Comisión Nacional de Energía Atómica y dejó de funcionar el Servicio Geológico y Minero Argentino.

Este orden jurídico permite el despliegue de una actividad económica transnacionalizada cuyas importantes ganancias se remiten al exterior, y favorece los intereses de burocracias políticas corruptas asentadas en las provincias mineras. Recibe este sector un trato impositivo privilegiado, con estabilidad fiscal por treinta años, levemente superior a la vida útil de los proyectos. Se establecen laxas normas de protección ambiental que permiten la explotación minera con tecnología a cielo abierto y lixiviado con cianuro, y un uso intensivo de agua, prácticas prohibidas en muchos países. Las empresas difunden que su accionar es benéfico por la generación de puestos de trabajo, que impulsan el desarrollo industrial al generar empresas proveedoras locales, que aumentan las exportaciones en miles de millones de dólares, que pagan sus impuestos y que no contaminan.

La realidad es otra: los puestos de trabajo existen mientras haya oro, que según el pro-

*Debemos extraer los minerales que necesitamos para propiciar un desarrollo industrial integral, y no los que las multinacionales requieren para llevarse a sus países, como ocurre actualmente. El Estado nacional debe recuperar la planificación estratégica y la propiedad de los recursos.*

yecto de que se trate puede ser durante 5, 15 o hasta 23 años, luego los trabajadores deberán buscar otra cosa. Donde había una montaña queda un gran hoyo, y en las inmediaciones, un “dique de cola” conteniendo aguas contaminadas con cianuro de potasio; la cordillera de los Andes, especialmente en la provincia de San Juan, es zona sísmica, por lo que existe peligro de que se derrame el contenido de los “diques de cola”. De presentarse un estrago catastrófico, el laxo orden jurídico no establece claramente cómo se remediará el daño al ambiente, ni quién se hará cargo de los costos. En caso de demandas, la empresa puede declararse en quiebra, y el Estado nacional deberá hacerse cargo. Por otra parte, el desarrollo industrial está limitado a proveedores de insumos de baja tecnología, ya que, al estar las empresas mineras exentas del pago de tasa de estadística y de aranceles de importación, traen del extranjero los equipos necesarios y privan así a la industria de bienes de capital nacional de la posibilidad de desarrollo.

No se menciona que las empresas pagan impuestos recién a partir del sexto año de comienzo de sus operaciones, y que la legislación las beneficia con exenciones privilegiadas. En cuanto a las exportaciones de miles de millones de dólares, son un simple asiento contable, ya que la legislación vigente les autoriza liquidar en el exterior el 100% del valor, y por lo tanto nuestro país no recibe en beneficio ni un dólar. Pero lo más grave de esto es que la base de cálculo, tanto de lo exportado como de lo pagado a la provincia en concepto de regalías, es una declaración jurada de la empresa que no tiene ningún tipo de control estatal.

En el trienio 2004-2006, la empresa La Alumbrera exportó concentrados de oro y cobre por valor de 2.200 millones de dólares, mientras que en el mismo período la provincia de Catamarca recibió 48 millones de dólares, el 2,2% del valor de lo exportado; no es de extrañar entonces que Catamarca, a pesar de tener desde hace años en su territorio a esta minera, siga siendo la provincia con mayor pobreza del noroeste argentino, según el INDEC. La Alumbrera consume el 80% de la electricidad de todo el noroeste del país, y tiene la energía subvencionada por todos los argentinos.

Para obtener sus fines, esta minera ha recurrido a diversas maniobras, como la guerra civil promovida en la república del Congo –Mobutu *versus* Kabila–, donde murieron millones de africanos. Barrick Gold es canadiense; las consecuencias ambientales de sus labores eran bien conocidas tanto por Greenpeace, de origen canadiense, como por Vida Silvestre (WWF), cuyo presidente es el príncipe Felipe de Inglaterra. Estas ONG ecologistas, tropa propia del imperialismo comenzó su avance, operaron en nuestro país desplegando maniobras distractivas, llamando la atención sobre otros temas, alertando sobre el derretimiento de los glaciares debido al “calentamiento global” –y no por la futura operación de las mineras canadienses–. Nos decían que el peligro estaba en la atmósfera, que se “contaminaba” con dióxido de carbono; nos hacían

mirar hacia arriba mientras su interés estaba en llevarse los recursos que estaban bajo nuestros pies. El Tratado Argentino-Chileno de Integración y Complementación Minera, que diluye las soberanías argentina y chilena sobre la superficie de la cordillera de los Andes entre los paralelos 23° y 51°, e incrementa las atribuciones de las empresas concesionarias para disponer del suelo y el ambiente a su arbitrio, tiene antecedentes en tratados transfronterizos en África. Esto también era conocido por las ONG ecologistas transnacionales. La connivencia que se da con parte del sector académico a través de acuerdos con universidades públicas y privadas completa el cuadro de las complicidades, con el ocultamiento del carácter depredador de esta industria. Debe entenderse que la minería es de carácter estratégico para un proyecto nacional que impulse un plan de desarrollo autónomo de nuestra economía. Partiendo entonces de que debemos extraer los minerales que nosotros necesitamos para propiciar un desarrollo industrial integral, y no los que ellos quieran para llevarse a sus países, como ocurre actualmente, el Estado nacional debe recuperar la planificación estratégica, la propiedad de los recursos y la autorización para participar de los negocios mineros, prohibidas por el artículo número 9 del Código de Minería. Esto sólo podrá ser llevado a cabo en el marco de una revolución nacional con una nueva conducción política que surja de la lucha del pueblo organizado en un frente nacional antiimperialista. Nada puede esperarse de la partidocracia

**Nuevo cuaderno**  
de la Izquierda Nacional, solicítalo en:  
[www.izquierdanacional.org](http://www.izquierdanacional.org)

**LEÓN TROTSKY**  
El legado de un revolucionario

Protagonista principal de los acontecimientos revolucionarios de 1905 en la vieja Rusia zarista, y en las revoluciones de febrero y octubre de 1917, León Trotsky fue, junto con Lenin, la personificación de un proceso de profundas transformaciones de carácter político, social, económico y cultural, anuncio de que una nueva era en la historia de la humanidad se había iniciado. Jefe del Ejército Rojo victorioso contra los ejércitos blancos de la contrarrevolución y la invasión imperialista, opositor resuelto, desde el poder y desde el exilio, ante el terrorismo stalinista y la degeneración estalinista, agitador y publicista de encendida elocuencia, la figura de Trotsky resurge bajo una luz intensa en una época en que el “posibilismo”, el “pragmatismo” y el “seguidismo” parecen ser la moneda corriente de la política.



Cuadernos de la Izquierda Nacional  
[www.izquierdanacional.org](http://www.izquierdanacional.org)

5

